



## **Huelga general de educación el 9 de mayo: Hay alternativas**

El próximo jueves 9 de mayo, representantes de todos los sectores de la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación) han convocado una huelga general educativa para mostrar su unánime rechazo a los ataques sistemáticos que está sufriendo nuestra educación pública, mediante unas políticas centradas en brutales recortes presupuestarios que superan ya los 5000 millones de euros, y que tienen como objetivo encubierto el desmantelamiento de servicio público educativo, único garante real del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.

A ello se suma el empeñamiento del ministro Wert por seguir adelante con su proyecto de LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), a pesar del rechazo que viene cosechando en amplios sectores de la comunidad educativa y del varapalo recibido recientemente desde el Consejo de Estado, cuyo dictamen sostiene, entre otras muchas objeciones sobre aspectos centrales, que ni se necesita una nueva ley de educación para aplicar los cambios que se pretenden introducir, ni es de recibo plantearla sin un amplio acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales.

La aplicación de las medidas que se recogen en el Anteproyecto de LOMCE supondría el principio del fin del modelo de educación pública que se ha ido conquistando durante décadas, y su paulatina sustitución por un sistema educativo mercantilizado, cuya calidad estaría íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de las familias. Trata así de consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación. La pública centrada en atender a las clases bajas, y a quienes sean rechazados por el sector privado y zonas rurales, que no son rentables para la iniciativa privada.

La LOMCE pretende extender y potenciar territorios escolares reservados a la élite, excluyendo a su vez a las hijas y los hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos. De esta forma lo que busca esta contrarreforma es reducir el período de enseñanza obligatoria. La exclusión de una cierta parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo y la reformulación del principio de gratuidad y mediante introducción de fórmulas de re-pago de la educación. El propio bachillerato supondría importantes gastos que no toda la ciudadanía podrá costear, por no hablar de los aumentos, que ya estamos sufriendo, de las tasas universitarias o los desorbitados precios de másteres y cursos de postgrado.

Las reválidas, la elección obligada de itinerarios segregadores a edades tempranas, el control externo de lo que hay que aprender/enseñar, o la ausencia de participación democrática en la gestión de los centros educativos supondrían, sin lugar a dudas, otro ataque sin precedentes a la igualdad y a la equidad en educación. También se quieren potenciar centros de diferentes niveles según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y “excelencia” de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de

calidad para todos y todas. Además esa especialización estará más ligada a intereses privados empresariales y de “los mercados,” que a la formación integral del alumnado.

Y todo ello se enmarca en un proceso de continuos recortes que atacan directamente la calidad de la educación pública: aumento de ratios de alumnado, reducción drástica de personal docente, eliminación o reducción de becas y ayudas, presupuesto irrisorio en las partidas destinadas a formación, investigación... Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual. Los informes internacionales, como el reciente de la UNESCO, y los propios objetivos de Europa 2020 inciden en una prioridad básica para ello: invertir.

La comunidad educativa viene reclamando hace meses, junto a amplios colectivos sociales, la retirada inmediata del anteproyecto de LOMCE; exigencia que tras el dictamen del Consejo de Estado debería llevar al Gobierno Rajoy a no dilatarla más, y a impulsar un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa para elaborar un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de nuestro sistema educativo y las medidas que pueden mejorar su calidad con equidad, asegurando en todo caso los recursos necesarios para ello y aplicando un “rescate” a la educación pública semejante al que se ha puesto a disposición de las entidades bancarias.

Por ello toda la comunidad educativa y toda la ciudadanía debemos sumarnos a la huelga del 9 de mayo, tan oportuna como necesaria; y a cuantas movilizaciones sean convocadas contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quiere imponer el PP, tanto en las enseñanzas básicas y postobligatorias (LOMCE), como en las universitarias, que asimismo han sido objeto de un informe de “expertos” designados unilateralmente por Wert, al margen de la comunidad universitaria y de sus órganos representativos.

Debemos defender un modelo de educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática. Una educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Una educación personalizada, integral e inclusiva, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Una educación en igualdad que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural. Una educación democrática que potencie la participación de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y distritos escolares. Una educación que motive al profesorado, reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y permanente. Una educación con financiación pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.